

La realidad siempre supera la ficción, afirmó en alguna oportunidad Oscar Wilde, y lo vivido en Chile durante agosto reafirma con creces la sentencia del escritor y poeta británico, mostrando que nuestro país puede convertirse de pronto en un remedo de Macondo. Algunos hechos que lo respaldan: Mientras un viento huracanado y extraño a nuestra realidad climática soplab a comienzos de mes a 120 kilómetros por hora en Santiago y en algunas regiones del centro sur dejando a más de un millón y medio de chilenos durante días sin luz, pérdidas cuantiosas en infraestructura y bienes de consumo, y develando falencias graves del sector empresarial y del Estado para enfrentar emergencia, el crimen organizado mostraba su fuerza y penetración en el país con un récord de 24 homicidios en diez días, y un asalto cinematográfico a una empresa de valores a plena luz del día que permitió a sus autores huir con un botín de más de \$15 mil millones que aún no son encontrados; en tanto que en los tribunales comenzaba el juicio más mediático de las últimas décadas, con uno de los más connotados abogados de la plaza sentado en el banquillo de los acusados escuchando a los fiscales develar una trama de poder, dinero y delitos que amenazan salpicar a distintas instituciones del país durante el desarrollo del proceso.

El caso audios, como se ha bautizado al proceso provocado por la publicación de una conversación entre el abogado Luis Hermosilla, su cliente Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, se ha transformado en una caja de Pandora con efectos judiciales y políticos de alcances insospechados. La prisión preventiva decretada por la jueza Mariana Leyton para los imputados y la decisión de gendarmería de trasladar, en primera instancia, a Hermosilla a Santiago Uno y no a Capitán Yáber, donde son reclusos los acusados de delitos económicos, unido a las declaraciones presidenciales de “entró a la cárcel un señor que se creía muy poderoso... líder de una red de corrupción” y del ministro de justicia (“la solicitud de abogado Juan Pablo Hermosilla para trasladar a su hermano es ilegal”), desató una reacción fuerte en este último. En fuertes términos, acusó politización y riesgo de vulnerar el derecho de defensa establecido en la Constitución para cualquier acusado, señaló como inaceptable la intervención del Ejecutivo en un caso que no está cerrado y en que no ha habido determinación de culpa todavía, y solicitó al Ministerio Público entregar el registro de los whatsapp de su defendido para transparentar todos los contactos que éste tuvo con distintos sectores y evitar el “cuentagotas” de filtración de nombres.

Las implicancias del caso, hasta fines de mes, afectaba al ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus (por posible tráfico de influencias), al ex fiscal Guerra (por intercambio de información en Caso Penta, Dominga y Exalmar), al ex ministro del Interior Andrés Chadwick (por pago de informe en derecho para su defensa en acusación constitucional con dineros de Factop), a los hermanos Jalaff (dueños de Patio por uso de facturas falsas y al Fiscal Nacional (por chats con el propio Hermosilla) entre otros. En opinión de analistas, el caso puede tener efectos en la campaña municipal, donde la desconfianza de la ciudadanía hacia las elites (representada en este caso audios) beneficiaría a los candidatos independientes en desmedro de los representantes de partidos políticos (a los que se asocia a las elites, alejadas de los problemas de la gente, o, como lo señala la investigadora social Kathya Araujo puede agudizar en la ciudadanía el desencanto, desapego y distancia entre la elite y la ciudadanía, erosionando el tejido y cohesión social, claves en un sistema democrático. Los temores de Araujo se vieron reflejados en la última encuesta de Pulso Ciudadano UDD, que mostró que el 74% de los chilenos considera corrupto al poder judicial, una señal preocupante según Pepe Auth. “Los escándalos de corrupción, en lugar de mostrar la capacidad de la democracia para librarse de los corruptos, debilitan a la democracia porque extiende la idea de que todos son corruptos, y el efecto perverso de eso es que, cuando todos lo son, nadie lo es”, señala.

En el plano político, la irrupción de la expresidenta Bachelet en el escenario preelectoral y la elección de Venezuela provocaron variadas reacciones y disímiles consecuencias en el sector oficialista. Con un sorpresivo crecimiento en las encuestas, que la situaron como una de las figuras con mayor respaldo en la Cadem durante la segunda semana de agosto, y a sólo cuatro puntos de la líder de la oposición Evelyn Matthei en una segunda vuelta presidencial, Bachelet activó sus apariciones en eventos públicos, coordinando a través de su fundación Horizonte los equipos que elaboran el programa del futuro gobierno y la preparación de candidatos a las municipales, reafirmando su rol de factor de “unidad sin exclusiones”. Aunque descartó una candidatura presidencial, la capacidad del oficialismo para levantar otras figuras presidenciales (Tohá, Orrego, Vodanovich no logran subir de los 3 puntos en las mediciones de agosto), mantendrán a la expresidenta como una candidata latente después de las elecciones de octubre. Un efecto diferente y disruptivo han tenido los comicios presidenciales de Venezuela en el oficialismo, donde la clara posición del presidente Boric rechazando el fraude perpetrado por Nicolás Maduro y calificando a su gobierno como “dictadura” (lo que le ha significado un reconocimiento mundial), ha contrastado con el largo silencio frente al proceso viciado venezolano por parte del Partido Comunista chileno y, finalmente la explicitación de su discrepancia con la posición del Jefe de Estado sobre el carácter dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro, adoptada por el comité central del partido. Aunque es poco probable que un quiebre se produzca antes del período electoral, la situación ha dejado en un difícil rol a las ministras del PC presentes en el gabinete y la relación con partidos como el PS y PPD, algunos de cuyos miembros han planteado la imposibilidad de una convivencia con quienes aparecen hoy al lado de gobiernos no democráticos.

En la derecha, desde distintos sectores emergieron críticas a la negociación municipal, por no impedir la dispersión de votos, y a una falta de estrategia y programa de gobierno para enfrentar los futuros comicios de octubre y del 2025. Una encuesta de Panel UDD, que midió tendencias para la elección de gobernadores en la Región Metropolitana, Valparaíso y BíoBío mostró que, en las dos primeras regiones, los candidatos apoyados por sectores oficialistas y que muestran a una oposición dividida dan el triunfo a Claudio Orrego en primera vuelta en la RM y a Rodrigo Mundaca en segunda vuelta en Valparaíso, mientras que en Bío Bío Sergio Giacaman, apoyado por Chile Vamos, se impone frente al candidato de Republicanos y al ex senador Alejandro Navarro. La fragmentación en las candidaturas, la defensa de Javier Macaya su padre en un caso de abuso de menores, que le significó su renuncia a la presidencia de la UDI y los nexos del ex ministro de Interior Andrés Chadwick con el caso Hermosilla podrían también afectar el actual posicionamiento de la alcaldesa de Providencia, hoy la carta mejor aspectada con miras a la presidencial.

Una ola de homicidios encendió las alarmas en el país durante el mes de agosto y levantó dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno en materia de seguridad para controlar el creciente aumento del crimen organizado. Veinticuatro muertos en diez días, una cifra récord en la capital develó una lucha entre bandas delictuales de narcotráfico para el control territorial de comunas como La Pintana, Puente Alto, San Miguel, San Bernardo, El Bosque, San Ramón. El mundo político reaccionó unido pidiendo más medidas, las que fueron desde el Plan Leviatán, planteado por el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez para crear un Estado Mayor Conjunto de Seguridad, hasta el llamado de la presidenta del Partido Socialista pidiendo que el presidente Boric encabece la política de seguridad, a nuevas leyes para sumar a la ya intensa agenda legislativa o mayores dotaciones de carabineros, como exigió la alcaldesa Claudia Pizarro en la Pintana. La Moneda respondió a los emplazamientos con allanamientos masivos de la PDI y Carabineros en algunas poblaciones para desbaratar las bandas. “Es la pandemia del mal y la mayor amenaza actual contra el Estado de Chile”, afirma Ascanio Cavallo, y que sólo puede combatirse con más contrainteligencia y cooperación interinstitucional, porque el crimen organizado, al contrario de la mafia histórica, es movedizo, versátil e imaginativo”.

El sistema frontal que afectó a la Región varias regiones del país a comienzos de agosto fue calificado por la empresa Enel en sus efectos en el tendido eléctrico comparable al terremoto de 2010. La lenta respuesta de la empresa, sin embargo, motivo la intervención del gobierno, que puso metas y multas y amenazó con el término de la concesión a sus controladores italianos, mientras el ministro de Energía planteaba, sin éxito, la creación de una empresa estatal y explicaba a los usuarios el alza que experimentarán sus cuentas de luz durante agosto por la incorporación de los valores no cobrados durante la pandemia.

En materia económica, el Imacec de julio creció 4,2%, por sobre las expectativas que el mercado esperaba, por un mejor desempeño en los sectores mineros y manufacturero. El cierre de la siderúrgica Huachipato, una industria emblemática con 70 años de vida en la región del BíoBío debido a la incapacidad de competir frente a las sobretasas aplicadas a los productos chinos, fue calificado por Asimet como un duro golpe a la región, con consecuencias en el empleo y calidad de vida de sus habitantes. Por su parte, el acuerdo que puso fin a la huelga de La Escondida con el pago por parte de BHP de 33 millones de pesos como bono de término de negociación, estiman los analistas, pondrá presión a los procesos de negociación de otras mineras y podría verse reflejado en las proyecciones inflacionarias